

Ferraz y Génova ponen al borde del abismo el Tajo-Segura



El futuro del trasvase. Justo a la vuelta de la Semana de Pasión, el próximo 8 de abril, Alicante se juega gran parte de su futuro, la continuidad del Tajo-Segura, en una negociación en la que no tiene voz.

PERE ROSTOLL Si nadie lo remedia, el próximo 8 de abril, la ponencia que trata de desbloquear en Madrid el Estatuto de Castilla-La Mancha, encallado desde hace año y medio en el Congreso, pondrá el Tajo-Segura al borde del abismo. En una comisión en la que ni diputados de Alicante ni siquiera de la Comunidad tienen voz, Ferraz y Génova, las cúpulas madrileñas del PSOE y del PP, llevan camino de consumir una alianza política que daría alas a Castilla-La Mancha para iniciar el asalto final a la pretensión con la que lleva soñando desde hace años: cerrar el grifo a una conducción hídrica vital para el abastecimiento de la provincia. Al margen de poses y de palabrería de cara a la galería, socialistas y populares tienen bastante hilvanado un acuerdo sobre la base de un documento, avanzado por este periódico, que incluye en el preámbulo del Estatuto una referencia explícita a una reserva hídrica de uso exclusivo para Castilla-La Mancha fijada en 4.000 hm³, el doble de lo que actualmente se almacena en esa autonomía en uno de los años más lluviosos. Y en el que se recomienda que el Gobierno de esa comunidad tiene derecho a participar en los órganos de gestión que deciden sobre los envíos de agua a la provincia. En síntesis: un arma de destrucción masiva para poner el Tajo-Segura en situación crítica.

La alianza está a expensas de que el PSOE entregue formalmente el documento al PP. Desde el punto de vista parlamentario, están obligados a un acuerdo. ¿Por qué? Sencillo. Ya lo advirtió el presidente de la Comisión Constitucional, el socialista Alfonso Guerra, durante la reunión de la ponencia celebrada el pasado jueves. Si no se ajustara una redacción de consenso, finalmente, se sometería a la votación final y definitiva lo que actualmente figura en el Estatuto. Es decir, cerrar el trasvase en 2015 y multiplicar, hasta entonces, por 2,5 el actual cupo estratégico de Entrepeñas y Buendía, fijado en 240 hm³, hasta los 600 hm³. Eso sería letal para los intereses de la provincia de Alicante.

Tres conclusiones, por tanto: PP y PSOE están condenados a entenderse, la guerra del Tajo-Segura se empezó a perder cuando las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron su Estatuto y, finalmente, la negociación no se está tejiendo en función de los intereses de las cuencas receptoras. Con todo, Ferraz y Génova necesitan salvar la cara de María Dolores de Cospedal, número dos de Rajoy y líder del PP en esa autonomía; y de José María Barreda, presidente manchego y uno de los barones territoriales del PSOE con más peso en la formación. Y se están aplicando a ello. En este punto, una vez alcanzado un pacto que parece próximo, el debate que surgen casi a continuación es el del valor legal que tiene el cumplimiento del preámbulo de un Estatuto. Ninguno de los actores de este enredo tan perjudicial para Alicante se fía. En Ferraz, para aplacar el aluvión de críticas que van a llegar desde la Comunidad, minimizan el peso del preámbulo como elemento con rango de obligación. Por eso, Barreda ha terciado en la negociación para intentar que el texto vaya recogido también una disposición adicional y así certificar de inmediato la defunción del trasvase. Más allá de eso, una referencia tan clara aunque sea en el preámbulo, por un lado, mantiene abierto el debate sobre el cierre del trasvase y, por otro, lo que es más importante, es válido a efectos interpretativos en el caso de que el texto llegue al Constitucional. Y, de hecho, si esa parte del Estatuto no tuviera un gran valor, como plantean unos y otros, ¿por qué el PP se embarcó en un recurso contra el Estatuto catalán que se centraba en una alusión que, precisamente, sólo figuraba en el preámbulo?

La prueba de Alarte y el termómetro de Camps

El papel que jueguen los dos principales líderes políticos de la Comunidad, Francisco Camps y Jorge Alarte, en esta recta final de las negociaciones sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha puede convertirse en un elemento que tenga gran incidencia sobre los catorce meses que resta de legislatura. Alarte, en cierta medida, ha hecho una apuesta estratégica con el Tajo-Segura. Se ha subido al barco y, por ahora, no se bajado. Se ha mostrado firme en contra de cualquier reserva u obstáculo que condicione el trasvase e, incluso, el día 8, mientras en Madrid negocian, tendrá el gesto simbólico de estar en Elche con los regantes.

En cierta medida, el futuro del Tajo-Segura es una prueba. Si resiste y planta cara a Madrid habrá ganado mucho. Por contra, para Camps, esta negociación va a medir su fortaleza como barón territorial del PP. En las Cortes, también ha rechazado de plano cualquier reserva hídrica pero está por ver que, a expensas de que se levante el secreto de sumario del caso Gürtel, tenga el suficiente margen de maniobra para poder hacer frente a Dolores de Cospedal o, como le exige Compromís en las Cortes, para llevar la batalla hasta el Constitucional. P. R. F.